



European
University
Institute

ROBERT
SCHUMAN
CENTRE FOR
ADVANCED
STUDIES

EUDO CITIZENSHIP OBSERVATORY

INFORME SOBRE EL ACCESO A LOS DERECHOS ELECTORALES GUATEMALA

July 2015



US
University of Sussex



<http://eudo-citizenship.eu>

European University Institute, Florence
Robert Schuman Centre for Advanced Studies
EUDO Citizenship Observatory

***Informe sobre el acceso a los derechos electorales
Guatemala***

Bernadette Pezzarossi

July 2015

EUDO Citizenship Observatory
Robert Schuman Centre for Advanced Studies
Access to Electoral Rights Report, RSCAS/EUDO-CIT-ER 2015/8
Badia Fiesolana, San Domenico di Fiesole (FI), Italy

© Bernadette Pezzarossi

This text may be downloaded only for personal research purposes.
Additional reproduction for other purposes, whether in hard copies or electronically,
requires the consent of the authors.

Requests should be addressed to eudo-citizenship@eui.eu

The views expressed in this publication cannot in any circumstances be regarded as
the official position of the European Union

Published in Italy
European University Institute
Badia Fiesolana
I – 50014 San Domenico di Fiesole (FI)
Italy
www.eui.eu/RSCAS/Publications/
www.eui.eu
cadmus.eui.eu

Research for the EUDO Citizenship Observatory Country Reports has been jointly supported, at various times,
by the European Commission grant agreements JLS/2007/IP/CA/009 EUCITAC and HOME/2010/EIFX/CA/1774 ACIT,
by the European Parliament and by the British Academy Research Project CITMODES (both projects co-directed
by the EUI and the University of Edinburgh). The financial support from these projects is gratefully acknowledged.

For information about the project please visit the project website at <http://eudo-citizenship.eu>

Acceso a Derechos Electorales

República de Guatemala

Bernadette Pezzarossi

1. Introducción

En Guatemala existen seis tipos de elecciones. El primer tipo es la elección presidencial, en la cual se elige al poder ejecutivo, que está conformado por el Presidente y el Vicepresidente de la República. El segundo tipo es la elección municipal, para elegir al poder local que se conforma por un alcalde y su respectiva corporación municipal para cada municipio. El tercer tipo es la elección para el Congreso de la República por distrito. El cuarto tipo es la elección de diputados para el Congreso de la República por listado nacional. El quinto tipo es la elección de diputados para el Parlamento Centroamericano -PARLACEN-. El sexto y último tipo de elección es el referéndum, más conocido como “consulta popular”.

La elección presidencial, la elección del alcalde municipal y el referéndum, son elecciones que se ganan por mayoría absoluta, es decir que, la mitad de los votos más un voto deciden qué propuesta gana. La elección presidencial tiene una segunda elección o balotaje, el cual se ha dado en todos los procesos electorales que ha tenido la República de Guatemala desde que entró en vigor la actual Ley Electoral y de Partidos Políticos en 1985. La elección de las corporaciones municipales, la elección de diputados del Congreso de la República por listado nacional y la elección de diputados del Congreso de la República por distrito, la elección del Parlamento Centroamericano -PARLACEN-, se adjudican de acuerdo a una fórmula matemática, basada en una cifra repartidora. La Ley Electoral y de Partidos políticos denomina a esta fórmula “representación proporcional de minorías”.

Los distritos electorales mencionados se conforman por las 22 zonas geográficas de Guatemala, que se denominan departamentos, excepto el departamento de Guatemala, que se divide en Distrito Central y en Distrito de Guatemala. El Distrito Central está conformado únicamente por el municipio de Guatemala y el Distrito de Guatemala está conformado por el resto de municipios del departamento de Guatemala. Por lo tanto, son 23 distritos electorales dentro de la República. Cabe mencionar que cada uno de los 22 departamentos tiene un número diferente de municipios y en total la República de Guatemala se conforma de 338 municipios.

En cuanto al reconocimiento de los derechos electorales en Guatemala, la Constitución Política de la República de Guatemala promulgada en 1985 y vigente desde 1986, establece lo relativo al “Régimen Político y Electoral”, específicamente en el Capítulo I del Título V -Estructura y Organización del estado-. Es en el artículo 223 que la Constitución de Guatemala garantiza la libre formación y funcionamiento de las organizaciones políticas y remite al Decreto 1-85, Ley Electoral y de Partidos Políticos LEPP, todo lo relativo al ejercicio del sufragio, los derechos políticos, organizaciones

políticas, autoridades, órganos electorales y proceso electoral. La Ley Electoral y de Partidos Políticos es de rango constitucional, por lo que se sitúa dentro de la jerarquía legal de Guatemala, inmediatamente después de la Constitución Política de la República y tiene preeminencia sobre el resto de la legislación, es decir, las leyes denominadas “ordinarias”, los reglamentos y resoluciones judiciales. La Constitución del año 1985 regula en el artículo 136 los deberes y derechos políticos, siendo estos inscribirse en el Registro de Ciudadanos, elegir y ser electo, velar por la libertad y efectividad del sufragio, velar por la pureza del proceso electoral, optar a cargos públicos, participar en actividades políticas y defender el principio de alterabilidad y no reelección en el ejercicio de la Presidencia. El artículo 37 establece el Derecho de Petición en materia política. Constituyen asimismo pilares fundamentales de la dinámica electoral guatemalteca lo relativo a la forma de elección, los requisitos y prohibiciones para optar a los cargos de Presidente, Vicepresidente o diputados al Congreso de la República (Artículos 157, 162, 164, 184, 185, 168 CPRG) y lo relativo al principio de no reelección del presidente (Artículo 187 CPRG), principio constitucional al que se le da especial importancia, derivado que tiene como fin, evitar la consolidación de una dictadura en el país.

En la República de Guatemala no existe legislación que permita a ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero o a extranjeros residentes en el territorio nacional, votar o convertirse en candidatos. Sin embargo, derivado de los inconvenientes que se dieron en las elecciones 2011, el Tribunal Supremo Electoral inició el debate para realizar reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos –LEPP-. En las discusiones estuvieron presentes los representantes de partidos políticos y los representantes de organizaciones de la sociedad civil. La propuesta final de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos fue entregada por el Tribunal Supremo Electoral al Congreso de la República el 06 de agosto de 2012 y el Congreso la conoció los días 24, 29 y 31 de octubre del año 2013, aprobándola por medio del acuerdo 5-2013 y enviándola a la Corte de Constitucionalidad para que emitiera dictamen sobre el respeto a las normas constitucionales de la reforma electoral. El dictamen fue favorable a pesar de contener varios artículos inconstitucionales según la misma corte, pero la reforma no ha sido confirmada por el Congreso de la República y por ende no ha entrado en vigor.

En dicha propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos políticos se incluyó un artículo que establece la realización y aprobación de una ley especial para regular e implementar el voto de ciudadanos guatemaltecos residentes en el extranjero. Sin embargo en la propuesta de reforma no se reconoce ninguna clase de derecho para convertirse en candidato en el extranjero, ni derechos para extranjeros residentes en Guatemala para votar o convertirse en candidatos.

En Guatemala los políticos, los dirigentes de organizaciones civiles, las organizaciones de migrantes, la academia y todos los demás actores relacionados de alguna forma con temas electorales, están conscientes de la precariedad del sistema electoral guatemalteco y la necesidad urgente de hacer reformas de forma y de fondo que fortalezcan el mismo. >Existen esfuerzos constantes del Tribunal Supremo Electoral, de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República y de organizaciones conformadas por ciudadanos, en posicionar el tema de la reforma electoral en la agenda política del país y con ello lograr que exista una mejor dinámica entre el sistema electoral, el sistema de partidos y el sistema político. Sin embargo, el debate, discusión, investigación y propuesta en relación al tema electoral en Guatemala siguen siendo limitados.

2. Antecedentes Históricos

El sistema electoral de Guatemala se instituyó en el año 1945, a partir de la Constitución Política decretada por la Asamblea Nacional Constituyente. En el año 1946 se aprobó el Decreto 255 -Ley Electoral-. Previo al establecimiento de un sistema electoral *per se*, se dio el reconocimiento por la Constitución Política de 1879, del sufragio directo (popular) de los varones alfabetos mayores de 21 años que tuvieran oficio o medio de subsistencia y de los militares mayores de 18 años.

En el año 1887 se reconoce el derecho a voto de los varones que posean un grado literario en cualquiera de los centros académicos del país. Es a partir del año 1935 que se reconoce el derecho a voto de los varones analfabetos mayores de 18 años, pero con la limitante de que debían tener profesión (Tribunal Supremo Electoral: 1998: 12).

El 28 de noviembre de 1944 la Junta Revolucionaria de gobierno emitió el decreto número 17, que contiene los principios fundamentales de la Revolución del 20 de octubre, entre los que se encuentran: “El reconocimiento constitucional de los partidos políticos de tendencia democrática, organizados conforme a la ley, y en representación de las minorías en los cuerpos colegiados de representación popular” (Guerra Roldán: 1996: 16).

La Constitución de 1945 estipulaba un Registro Cívico, en el que los hombres mayores de 18 años tenían obligación de inscribirse, mientras que para las mujeres y los analfabetos era optativo. Esa misma Constitución normó que los guatemaltecos tenían el derecho de organizarse en partidos políticos, los que deberían inscribirse de conformidad con la Ley Electoral. Estableció la representación para las minorías en la elección de cuerpos colegiados y se crearon la Junta Nacional Electoral y el Registro Cívico como autoridades electorales (Guerra Roldán: 1996: 17).

Es necesario hacer mención de que la Ley Electoral de 1946 además introduce el sistema de listas de partido, pero también se permitían las candidaturas independientes (Tribunal Supremo Electoral: 1998: 12). Bajo este sistema fueron electos presidentes Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán respetando la voluntad de las mayorías. En 1954 se produjo la renuncia forzada del presidente Arbenz y el establecimiento de sucesivas juntas de gobiernos de corta duración, período convulso que desembocó en la asunción del poder por el coronel Carlos Castillo Armas. Consolidado el movimiento que dirigió se convocó a una siguiente asamblea constituyente, que sancionó la Constitución del 2 de febrero de 1956. En esta se anuncia (artículo 29) que “La ley regulará el ejercicio del sufragio...” y (artículo 35) “crea un Tribunal Electoral que tendrá carácter de órgano administrativo...” (Sáenz Juárez: 2002: 7).

En la Constitución de 1956 se mantiene el reconocimiento de la ciudadanía sólo a las mujeres que sepan leer y escribir. Se incorpora un capítulo especial para los partidos políticos, a los que se les reconoce como instituciones de derecho público y se les otorga la exclusividad para postular candidatos a los cargos de presidente de la República y diputados. Se establece el sufragio efectivo, obligatorio para los alfabetos, y se reconoce el derecho de las minorías para ser representadas en cuerpos colegiados (Guerra Roldán: 1996: 17).

Asesinado el coronel Castillo Armas en 1957, el encargado de la Presidencia convocó a elecciones para sustituirlo. Declarado triunfador el abogado Miguel Ortiz Pasarelli, uno de los candidatos opositores, el general Miguel Idígoras Fuentes, impugnó por vías de hecho tal declaratoria, lo que llevó al Congreso a declarar su nulidad. Al repetirse la

elección, resultó ganador el General Fuentes. Es en su período de gestión que ocurre el alzamiento militar del 13 de noviembre de 1960, hecho que marca el inicio de lo que será el movimiento guerrillero, que perduró los treinta y seis años siguientes, en los que Guatemala vivió un conflicto armado interno (Sáenz Juárez: 2002: 8).

En marzo de 1963, Idígoras es derrocado por su ministro de la defensa, el coronel Enrique Peralta Azurdia, quien asume el poder como Jefe del Gobierno de la República, y convoca a una siguiente asamblea constituyente, que crea la Constitución de 1965, en la que se omite el Tribunal Electoral y lo sustituye por “el Registro y el Consejo Electoral, con funciones autónomas y jurisdicción en toda la República.” (artículo 34) (Sáenz Juárez: 2002: 8).

En la Constitución de 1965 se otorgaba el derecho de ciudadanía a todos los guatemaltecos, hombres y mujeres, mayores de 18 años. El sufragio se estableció universal y secreto, obligatorio para los alfabetos y optativo para los analfabetos. También se reconoció a los partidos políticos el carácter de instituciones de derecho público, y para inscribirse en el Registro Electoral debían contar con un mínimo de cincuenta mil afiliados, de los cuales menos del veinte por ciento deberían ser alfabetos (Guerra Roldán: 1996: 17).

Desde 1965 hasta el golpe de estado del mes de marzo de 1982, el sistema electoral giraba alrededor de un Director del Registro Electoral, designado por el Poder Ejecutivo, con el apoyo de un Consejo Electoral integrado por un miembro titular y su suplente designados por cada uno de los partidos políticos legalmente inscritos y vigentes, que hubiesen obtenido el 15% de los votos válidos en la última elección, un miembro titular y su suplente designados por el Congreso de la República, y un titular y su suplente designados por el Consejo de Estado (Tribunal Supremo Electoral: 1998: 13).

A partir del año 1970, cuando el General Carlos Arana triunfa en las elecciones de ese año, se inicia el régimen militar, a través de un pacto de los generales, oficiales de más alta graduación, que se adjudicaron el turno en el ejercicio de la presidencia, y gobernaron a través de un partido propio, que organizó alianzas con los otros partidos del centro-derecha y extrema derecha. En el ejercicio del poder perdieron legitimidad, por varias razones, pero sobre todo por los fraudulentos procesos electorales, que eran manipulados abiertamente (García Laguardia: 1999: 21).

Durante este período sobresale el hecho de que los procesos electorales fueron sumamente cuestionados, se cree que hubo alteración de resultados electorales, hasta que en el año 1982 se inicia una etapa de múltiples cambios para el sistema, a partir del golpe de estado que derrocó al General Lucas García.

Derivado del derrocamiento del General Lucas García, se integra la Junta Militar de Gobierno –triunvirato- que emitió el Estatuto Fundamental de Gobierno. La Junta de Gobierno fue disuelta y se convierte en presidente el general José Efraín Ríos Montt, quien fue derrocado mediante un golpe de estado, generando la asunción a la Presidencia del General Oscar Mejía Victores (Sáenz Juárez: 2002: 8).

Al cumplirse el primer año del golpe de estado, en el año 1983, se emitieron los Decretos-Ley de la Jefatura de Estado 30-83, 31-83 y 32-83 que contenían la Ley Orgánica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas respectivamente (Tribunal Supremo Electoral: 1998: 14). El Decreto 30-83 crea el Tribunal Supremo Electoral. También se promulga la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de Organizaciones Políticas.

Entonces, en 1984 se celebraron las elecciones de diputados para la Asamblea Nacional Constituyente, siendo este el primer proceso electoral llevado a cabo por el Tribunal Supremo Electoral actual. La Asamblea Nacional Constituyente electa en aquella oportunidad decreta la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley de Electoral y de Partidos Políticos (Decreto 1-85). Ambas entraron en vigor en el año 1986.

En el año 1985 se había decretado por el jefe de facto la normativa específica y necesaria para las elecciones generales, es decir, de Presidente, Vicepresidente, diputados al Congreso de la República y corporaciones municipales, las cuales se llevaron a cabo el 3 de noviembre de ese mismo año. El 14 de enero del año 1986 la Constitución Política de la República comienza su vigencia y ese mismo día asume el poder, bajo el recién estrenado sistema electoral, el Señor Vinicio Cerezo Arévalo.

Como se pudo observar, fue derivado de la constante cooptación del poder por parte de la cúpula militar, que generaba el derrocamiento constante de los gobiernos y por ende mucha desestabilización en el país, que se consideró necesario hacer cambios sustanciales al sistema electoral guatemalteco y se inicia una nueva etapa democrática en Guatemala.

En el nuevo orden constitucional y electoral de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral dejó, en teoría, de estar sujeto al Organismo Ejecutivo y a las Organizaciones Políticas de una u otra forma, como lo estuvo en épocas pasadas, consolidándose un nuevo sistema en Guatemala, en el cual no se volvió a tener a un militar como presidente de la República, hasta las elecciones generales de 2011, en las cuales el ex general del ejército, Otto Pérez Molina, gana la presidencia.

3. Elegibilidad

3.1. Ciudadanos Residentes

Edad: El artículo 2 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEPP, establece que son ciudadanos, todos los guatemaltecos mayores de dieciocho años. El artículo 3 de esa misma ley (incisos c, d y e), establece como derechos para quienes son ciudadanos, el derecho a elegir y ser electo, ejercer el sufragio y optar a cargos públicos.

Por lo tanto, para votar el mínimo de edad es dieciocho años. El mínimo de edad para convertirse en candidato para cualquier tipo de diputación, para optar al cargo de alcalde o pertenecer a la corporación municipal también es de 18 años. Sin embargo, la edad para convertirse en candidato de la presidencia o vicepresidencia de la República es diferente, el artículo 185 de la Constitución Política establece que el candidato debe ser mayor de cuarenta años.

Discapacidad Mental: El artículo 4 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece la suspensión de derechos ciudadanos a las personas con disparidad mental y para la inhabilitación se requiere que un juez civil declare la misma, después de hacer la respectiva consideración del caso. Las normas legales aplicables específicamente para el juicio que declara la inhabilitación mental (*Declaratoria de interdicción*) son el Código Civil de Guatemala (Decreto Ley 106 del Jefe de Gobierno) y el Código Procesal Civil (Decreto Ley 107 del Jefe de Gobierno)

El artículo 5 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos da la posibilidad de recuperar los derechos ciudadanos de estas personas por medio de la rehabilitación judicial, en un procedimiento ante un juez civil.

Personas condenadas penalmente: De acuerdo al artículo 4 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, también están suspendidos los derechos de los ciudadanos condenados en un proceso penal. El artículo 5 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, establece que los derechos como ciudadano se recuperan al cumplir con la pena impuesta por el juez.

El artículo 5 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos también da la posibilidad a los condenados de recuperar sus derechos ciudadanos por amnistía o por indulto. El indulto era otorgado por el Presidente de la República, sin embargo se dejó de otorgar desde la presidencia de Alfonso Portillo (2000-2004). Por lo tanto, los convictos no pueden ejercer su derecho a voto, ni correr como candidatos a ningún cargo de elección popular. Sin embargo, las personas en prisión preventiva, es decir, los prisioneros que se encuentran bajo investigación pero aún no han sido condenados, tienen el derecho de votar y ser candidatos.

En la práctica las personas en prisión preventiva no ejercen su derecho al voto ni a correr como candidatos. Según el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, la razón es por la inseguridad dentro de las cárceles.

Prohibición específica: En el inciso a) del artículo 15 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, se establece la prohibición para ejercer el derecho al voto para los ciudadanos que se encuentren en servicio activo en el Ejército Nacional o en los cuerpos policíacos y quienes tengan nombramiento para cualquier comisión o trabajo de índole militar.

En el inciso b) de ese mismo artículo se establece prohibición de votar a quienes estén suspendidos en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, es decir, quienes han sido declarados en estado de interdicción (discapacidad mental) y los condenados penalmente, así como las personas que hayan perdido la ciudadanía.

3.2 Ciudadanos no residentes dentro del territorio

Criterio de Elegibilidad

La legislación de la República de Guatemala no regula derechos electorales ni para votar ni para correr por una candidatura a los ciudadanos guatemaltecos que no se encuentren dentro del territorio nacional, sin importar el nivel o tipo de elección.

Los ciudadanos guatemaltecos que residen en otros países y deseen votar el día de la elección pueden hacerlo si están inscritos en el registro de ciudadanos y entran al país para ejercer su derecho al voto, debido a que la única forma de ejercer el voto en Guatemala es de forma presencial, a través de centros de votación en el distrito en el que está inscrito el ciudadano.

Modo de Representación

Como se lee en el apartado anterior, no se ha implementado el voto de ciudadanos guatemaltecos que se encuentren residiendo fuera del territorio, sin embargo los registros de ese grupo de ciudadanos guatemaltecos, permanece en el Registro de Ciudadanos y si entran al país pueden votar el día de la elección. Este grupo de ciudadanos puede votar en todos los tipos de elección. Esta última afirmación no está contenida en ninguna norma, sin embargo no existe tampoco una prohibición para que no suceda y en la práctica sucede.

Muchos ciudadanos guatemaltecos han migrado y han dejado de votar en varias elecciones. Por eso, la discusión de reforma de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del año 2012 incluyó un artículo en el cual se establece que después de dos procesos electorales en que un ciudadano ha estado inactivo, es decir, que no ha asistido a votar, se da de baja en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral, de tal forma se busca tener un registro de ciudadanos más confiable, ya que las migraciones de forma ilegal generan datos inexactos en los registros y estadísticas nacionales.

3.3 Extranjeros residentes

Los extranjeros residentes dentro del territorio nacional son todos de la misma categoría, ninguno posee derechos electorales de ningún tipo, no pueden votar, ni correr como candidatos en elecciones locales (alcalde y corporación municipal), regionales (diputaciones distritales) o nacionales (diputaciones por listas nacionales y poder ejecutivo).

Se debe aclarar que los derechos electorales de extranjeros residentes en el país no se han promovido a través de tratados de reciprocidad o de cualquier otro tipo de tratado, ni se otorgan a nacionales de estados que sean miembros de una organización internacional. Ahora bien, los ciudadanos de los países centroamericanos pueden hacer un procedimiento legal, para ser considerados ciudadanos guatemaltecos. Este derecho es otorgado por el artículo 145 de la Constitución Política, por la única razón de que son centroamericanos.

Para realizar la naturalización, los ciudadanos centroamericanos no deben llenar ningún otro requisito. No es necesario llenar requisitos relacionados con residencia dentro del territorio y pueden conservar la nacionalidad del otro país, pudiendo tener dos nacionalidades, lo cual no afecta para el ejercicio de derechos electorales.

Si algún ciudadano de otro país de Centro América realiza el procedimiento legal, si puede ejercer derechos electorales en Guatemala porque “son considerados guatemaltecos de origen”. Por ello pueden votar e incluso pueden correr como candidato, como sucedió en el caso de la ex candidata Patricia de Arzú, que nació en la República de El Salvador y al seguir el procedimiento estipulado por la ley, se convirtió en ciudadana guatemalteca, participando como candidata para presidente en las elecciones de 2011 y quien además es esposa del ex presidente Álvaro Arzú.

De igual forma los ciudadanos, que tengan doble nacionalidad, aun cuando la otra nacionalidad no sea de un país centroamericano, pueden ejercer derechos electorales tanto para elegir como para ser electo, siempre y cuando sean guatemaltecos de origen. Por ejemplo, los guatemaltecos de origen que solicitan a estados europeos la naturalización por ser descendientes directos de un nacional de aquel país. Un ciudadano extranjero de un estado que no sea centroamericano puede naturalizarse, por medio del procedimiento legal.

Sin embargo para este tipo de ciudadanos, se debe cumplir con alguno de los requisitos siguientes:

- a. Tener domicilio en la República y haber residido durante los cinco años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubiere ausentado del territorio nacional, por más de seis meses consecutivos o períodos que sumados den un año o más.
- b. Tener domicilio en la República y haber residido dentro del territorio nacional, por períodos que sumados den diez años o más.
- c. Tener domicilio en la República y haber residido dentro del territorio nacional, por los dos años inmediatamente anteriores, siempre que no se hubiere ausentado, más de un mes consecutivo o períodos que sumados den más de dos meses, y estén comprendidos en alguno de los casos siguientes:
 1. Si hubiere prestado a Guatemala servicios importantes o hubieren contribuido a su desarrollo económico, social o cultural, en forma que, a juicio del Poder Ejecutivo, sea digna de tomarse en cuenta;
 2. Si los tres años anteriores a su arribo a la República de Guatemala hubiere residido en país centroamericano;
 3. Si tuvieren reconocido mérito científico, artístico o filantrópico; y
 4. Si fueren apátridas o de nacionalidad indeterminada.

La Constitución de la República de Guatemala establece en el artículo 146 lo siguiente: “los guatemaltecos naturalizados, tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución”. Por ello, este tipo de ciudadanos guatemaltecos, es decir, los ciudadanos naturalizados que provienen de estados que no sean centroamericanos, sin perjuicio de tener doble nacionalidad, pueden ejercer los mismos derechos que los ciudadanos de origen en cuanto al voto. Sin embargo, sus derechos para ser electos están limitados por la misma Constitución, porque dentro de los requisitos para ser candidato a los cargos que actualmente son por elección popular, está el de ser guatemalteco de origen y por ello los guatemaltecos naturalizados no pueden optar a los mismos.

3.4 Derechos Electorales de las comunidades indígenas

A pesar de que no existe un censo de población reciente, de acuerdo a las estimaciones y proyecciones de población, con base en los Censos Nacionales XI de Población y VI de Habitación 2002 y a la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida -ENCOVI 2011-, el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala estima que los porcentajes de etnicidad en Guatemala durante el año 2012 están distribuidos en 39.8 % de población indígena y 60.2 % de población no indígena (INE: 2013: 13).

Los cuatro grupos étnicos dominantes en Guatemala son: Maya, Garífuna, Xinca y Mestizo, mejor conocido como Ladino. En Guatemala existe una diversidad de idiomas étnicos. Sin embargo, muchos indígenas también hablan el idioma español, debido a que han visto la necesidad de aprenderlo por ser de uso general.

El idioma español es reconocido como el idioma oficial en la Constitución de la República de Guatemala, sin embargo existen esfuerzos institucionales como la emisión por parte de la Corte de Constitucionalidad, de la Constitución Política en varios idiomas mayas, así como otros esfuerzos que se han dado por traducir otras leyes; la impresión de papeletas en diferentes idiomas mayas, cuando estos son predominantes en cierta zona geográfica del país, es un esfuerzo que hace el Tribunal Supremo Electoral con el fin de facilitar el ejercicio del sufragio.

Si bien la Constitución otorga protección a los diferentes grupos étnicos en cuanto a su forma de vida, costumbres, uso de sus trajes, idioma, entre otros, la legislación de la República de Guatemala no contempla ninguna norma específica o prerrogativa para regular Derechos Electorales a favor de las personas que pertenecen a alguna de las comunidades étnicas.

En las Elecciones Generales de los años 2007 y 2011, los ciudadanos guatemaltecos eligieron a 158 diputados para el Congreso de la República. En 2007 se eligió 17 personas indígenas, lo que representa un 10.8 % de las diputaciones y en 2011 se eligió a 22 personas indígenas, lo que representa un 13.9 % de las diputaciones (Vásquez: 2013: 80).

En las Elecciones Generales del año 2011 se postularon 10 binomios para los cargos de Presidente y Vicepresidente, únicamente 2 personas eran indígenas mayas, lo que se traduce en un 10% del total de candidatos, hecho que no refleja la diversidad cultural del país, dado que según el último censo, la población indígena es aproximadamente el 41% del total de la población en la República de Guatemala (Batres: 2011:1).

En la propuesta de reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos realizada por el Tribunal Supremo Electoral en el año 2012 y conocida por el Congreso de la República en el año 2013, se incluyó en el artículo 54 de la Iniciativa de Ley, la reforma del artículo 212 de dicha ley. En la reforma se establece que en las comunidades lingüísticas en donde hay población mayoritariamente indígena, se debe incluir un 50% de candidatos pertenecientes a los grupos lingüísticos étnicos.

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República presentó su propia propuesta de reforma en 2012, en cuya Iniciativa de Ley no se incluye ninguna prerrogativa para las personas que pertenecen a alguna de las etnias.

Actualmente la agenda legislativa indígena consta de cinco Iniciativas de Ley que se han conocido en el Pleno del Congreso. Los temas sobre los que versan son: jurisdicción indígena, derechos de los pueblos indígenas, lugares sagrados, radios comunitarias y consulta a pueblos indígenas (referéndums locales). Las últimas tres iniciativas mencionadas ya cuentan con dictamen favorable pero deben ser aprobadas por el Pleno del Congreso (Batres: 2011:1).

La agenda legislativa indígena debe su retraso principalmente a los problemas sistémicos del estado guatemalteco, que generan una dinámica lenta y politizada en el Congreso, lo que acarrea como consecuencia que pocas veces los diputados discutan y aprueben legislación nueva, sin perjuicio del contenido de la misma. Aunque se debe reconocer que la agenda propiamente de temas indígenas cuenta con una cantidad reducida de representantes que ayuden a impulsarla dentro del Organismo Legislativo de Guatemala, como se pudo observar en los datos proporcionados anteriormente.

4 Ejercicio de los Derechos Electorales

4.1 Procedimiento de Registro: para convertirse en votante

El artículo 8 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos LEPP regula que la inscripción en el Registro de Ciudadanos es indispensable para votar o correr como candidato. La inscripción como ciudadano no se da de forma automática y por eso debe ser gestionada en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. El procedimiento es gratuito.

El artículo 9 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos regula que el ciudadano que quiera votar en las elecciones, debe estar inscrito tres meses del evento electoral, es decir del día de la elección, además de contar con su respectivo documento de identificación.

El reglamento de la ley electoral, artículo 4, regula detalladamente el procedimiento para inscribirse en el Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral. El cual se transcribe literalmente a continuación:

“Los ciudadanos que deseen empadronarse o actualizar su residencia electoral, deberán acudir a cualquier delegación, subdelegación o centro de empadronamiento del Registro de Ciudadanos.

Este trámite es personal, gratuito e indelegable y deberá el ciudadano para el efecto, proporcionar la información requerida. El ciudadano presentará el documento de identificación que establezca la ley de la materia y al completar la boleta, el empadronador le extenderá la contraseña, en la que se consignará la fecha en que deberá presentarse para que se le entregue el original de la boleta y se razone el documento de identificación, si fuere posible.

En la razón se indicará el número de empadronamiento y del municipio para ejercer el sufragio. La entrega de la contraseña se omite para los municipios en que se establezca el procedimiento automatizado y se verifican de manera inmediata, los datos del interesado.

Acto seguido, de ser posible, se razonará el documento de identidad establecido en la ley, colocándosele el número de empadronamiento; caso contrario, el Tribunal Supremo Electoral establecerá el mecanismo que se utilizará para acreditar su inscripción”.

4.2 Procedimiento de Registro: para convertirse en candidato

Para inscribirse como candidato se debe hacer una solicitud por escrito. El Tribunal Supremo Electoral realiza en cada proceso electoral, formularios para facilitar los procedimientos. En el artículo 214 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos se indica que la misma debe contener como mínimo: nombres completos de los candidatos, número de su Documento Personal de Identificación, número de empadronamiento del Registro de Ciudadanos, cargo y posición en que va a correr como candidato y el nombre de la organización política que lo está postulando. Al formulario deben adjuntar el certificado de partida de nacimiento y fotocopia del Documento Personal de Identificación.

El Tribunal Supremo Electoral, con base en el artículo 53 del Reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, requiere a las personas que se postulen para ser candidatos,

una declaración jurada en la que manifiesten su juramento de que cumplen con los requisitos legales y no tienen ninguna prohibición para ser candidatos.

Por último, El Tribunal Supremo Electoral requiere con base en los artículos 16 y 30 de la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos, la constancia de manejo de fondos públicos, extendida por la Contraloría General de Cuentas. En dicho documento se hace constar que la persona que será candidato a un cargo público no tiene reclamación o juicio pendiente como consecuencia de cargos desempeñados anteriormente derivados del manejo de fondos públicos.

Cabe mencionar que todas las inscripciones como candidatos se realizan dentro del territorio de Guatemala, ello derivado de que no existen procedimientos consulares para el efecto y en la actualidad se realizan manualmente.

En el caso de que un ciudadano guatemalteco ingrese al territorio de la República de Guatemala, si está inscrito en el Registro de Ciudadanos, cumple con los requisitos legales y no incurre en ninguna de las prohibiciones para el cargo que desee postularse, si puede correr como candidato. Esta última afirmación no está regulada en ninguna norma, sin embargo no existe tampoco una prohibición para que no suceda y se dio el caso del ciudadano Rafael Espada, quien residió en el extranjero durante varios años y regresó al país para correr como candidato, fue electo como Vicepresidente de la República.

Para convertirse en candidato a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, los requisitos establecidos en el artículo 185 de la Constitución son ser guatemalteco de origen, poder ejercer derechos ciudadanos y ser mayor de cuarenta años.

Los candidatos a Presidente o Vicepresidente, además de los requisitos descritos anteriormente, deben realizar una declaración jurada, en la cual haga constar que no incurre en ninguna prohibición estipulada en la ley como cualquier otro candidato. Sin embargo la Constitución Política de la República de Guatemala establece en el artículo 186 prohibiciones especiales para optar a dicho cargo, siendo estas las siguientes:

- a.** El caudillo ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni quienes como consecuencia de tales hechos asuman la Jefatura de Gobierno;
- b.** La persona que ejerza la Presidencia o Vicepresidencia de la República cuando se haga la elección para dicho cargo, o que la hubiere ejercido durante cualquier tiempo dentro del período presidencial en que se celebren las elecciones;
- c.** Los parientes dentro de cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad del Presidente o Vicepresidente de la República, cuando este último se encuentre ejerciendo la Presidencia, y los de las personas a que se refiere el inciso primero de este artículo;
- d.** El que hubiese sido ministro de Estado, durante cualquier tiempo en los seis meses anteriores a la elección;
- e.** Los miembros del Ejército, salvo que estén de baja o en situación de retiro por lo menos cinco años antes de la fecha de convocatoria;
- f.** Los ministros de cualquier religión o culto; y
- g.** Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.

En relación con este artículo, existen dos casos de trascendencia nacional, acerca de los cuales se hará una breve reseña a continuación.

El primer caso se dio en las elecciones del año 2003, el Tribunal Supremo Electoral deniega la inscripción como candidato presidencial al señor Efraín Ríos Montt, fundamentando la denegatoria en el inciso a) del artículo 186 de la Constitución Política, debido a que el señor Ríos Montt participó en un golpe de estado en el año 1982. Al promoverse la acción constitucional de amparo, la Corte Suprema de Justicia de Guatemala confirma dicha resolución, posteriormente al presentarse la apelación de la sentencia de amparo ante la Corte de Constitucionalidad, se le otorga el amparo al señor Ríos Montt y por ende se le permite correr como candidato presidencial, argumentando que la norma sólo es aplicable a hechos ocurridos dentro del orden constitucional actual, el cual inicio en el año 1986. Dicha sentencia tuvo lugar dentro del expediente 1089-2003 de la Corte de Constitucionalidad.

El segundo caso se dio en las elecciones del año 2011. El Tribunal Supremo Electoral denegó la inscripción como candidata presidencial a la señora Sandra Torres, fundamentándose en la literal c) del artículo 186 de la Constitución Política, debido a que fue esposa del ex presidente Álvaro Colom y se divorció unos días antes de presentarse como candidata, sin embargo al conocer el amparo la Corte Suprema de Justicia y al conocer la apelación de dicho amparo la Corte de Constitucionalidad (expediente número 2906-2011) confirmaron la resolución del Tribunal Supremo Electoral, aduciendo que la señora Torres cometió un fraude de ley y que fungió como Primera Dama de la Nación durante la administración del Presidente Colom, quien aún no terminaba su mandato y por ello si existía prohibición constitucional para ser candidata a la Presidencia de la República.

Relacionado con la postulación a la presidencia, es necesario mencionar que además existe prohibición de reelección para quien haya desempeñado por más de dos años el cargo de Presidente de la República. Esta prohibición se encuentra en el artículo 187 de la Constitución Política y se considera un principio muy importante de la República de Guatemala como se mencionó anteriormente. La misma Constitución establece la defensa de este principio como uno de los deberes de todos los ciudadanos guatemaltecos.

En cuanto a los requisitos para ser candidato a diputado, el artículo 162 de la Constitución establece los mismos, sin perjuicio del tipo de listado por el que se postule. Los requisitos son, ser guatemalteco de origen y estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, por lo tanto, el candidato debe ser mayor de dieciocho años.

El artículo 164 de la Constitución regula las prohibiciones para postularse al cargo de diputado, siendo estas:

- a.** Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo, Judicial y del Tribunal y Contraloría de Cuentas, así como los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y el director del Registro de Ciudadanos. Quienes desempeñen funciones docentes y los profesionales al servicio de establecimientos de asistencia social, están exceptuados de la prohibición anterior;
- b.** Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del municipio, sus fiadores y los que de resultas de tales obras o empresas, tengan pendiente reclamaciones de interés propio;

- c.** Los parientes del Presidente de la República y los del Vicepresidente dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- d.** Los que habiendo sido condenados en juicio de cuentas por sentencia firme, no hubieren solventado sus responsabilidades;
- e.** Quienes representen intereses de compañías o personas individuales que exploten servicios públicos; y
- f.** Los militares en servicio activo.

La constitución en ese mismo artículo regula que si al tiempo de la elección o posteriormente, el diputado electo resulta incluido en cualquiera de las prohibiciones contenidas en el artículo, se declarará vacante su puesto, excepto en caso de que incurra en las literales a) y e). En ese caso podrá optar entre el ejercicio de esas funciones o el cargo de diputado. Además establece que es nula la elección de diputado que administre justicia, en el distrito electoral que lo postula, o la hubiere ejercido tres meses antes de la fecha en que se haya convocado a la elección. Por último para optar a los cargos del poder local, es decir, para ser alcalde o miembro de la corporación municipal, de acuerdo al artículo 43 del Código Municipal, se debe ser guatemalteco de origen, estar inscrito en el distrito municipal por el que se postula, estar facultado para ejercer sus derechos ciudadanos y saber leer y escribir.

También existen prohibiciones que impedirían a una persona convertirse en candidato, las cuales están contempladas en el artículo 45 del Código Municipal y las cuales básicamente son:

- a.** El inhabilitado judicialmente por sentencia firme por delito doloso o sujeto a auto de prisión preventiva.
- b.** El que directa o indirectamente tenga parte en servicios públicos, contratos, concesiones o suministros con o por cuenta del municipio.
- c.** El deudor por fianzas o alcances de cuentas a los fondos municipales.
- d.** Cuando exista parentesco dentro de los grados de ley entre los electos.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos LEPP, establece en el artículo 212, que los partidos políticos legalmente reconocidos pueden postular candidatos a todos los cargos de elección popular y los comités cívicos únicamente podrán hacerlo para los cargos de alcalde y corporaciones municipales. El sistema electoral guatemalteco no permite las candidaturas independientes, se debe obtener el respaldo de algún tipo de organización política, es decir, de Partido Político o Comité Cívico.

4.3 Forma de ejercer el voto

El único método que se utiliza en las elecciones de Guatemala, aplicable a todos los tipos de elecciones, es el del voto en el centro de votación del municipio en dónde el votante está registrado, aun cuando las elecciones se realizan a nivel nacional y es el mismo día para elegir en todas las categorías de elecciones.

El procedimiento de votación es manual, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala imprime los listados de los votantes que corresponden a cada mesa de cada centro, a ese listado se le llama padrón electoral y los ciudadanos únicamente pueden emitir su voto en la mesa en donde hayan sido asignados, con excepción de los miembros de las Juntas Receptoras de Votos, quienes votan en la mesa en la que integraron junta. Los votantes deben presentar su documento de identificación, firmar e imprimir su huella.

El artículo 5 del reglamento de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, establece la obligación de los ciudadanos de declarar ante el Registro de Ciudadanos su cambio de residencia, para realizar la actualización debe presentar su Documento Personal de Identificación, y quedará inscrito en el padrón electoral del nuevo municipio en el que reside.

Por último, se hace la aclaración, que en Guatemala aún no se ha implementado ningún otro método como voto por correo, voto por mandato o procuración, ni el voto electrónico, pero debe evaluarse la posibilidad de que se implementen, sobre todo para facilitar que algún día puedan votar los ciudadanos guatemaltecos que no residen en el territorio nacional.

5. Conclusión

La historia convulsa del país dio como resultado el constante cambio del sistema electoral, su institucionalidad y los derechos electorales que el mismo conlleva. A través del desarrollo histórico de Guatemala, se dio la promulgación de diferentes constituciones y diferentes leyes que regulaban la materia electoral, y con ellas la ampliación en el reconocimiento de nuevos derechos.

El derecho de sufragio tuvo diferentes variaciones: en principio, se reconocía únicamente para varones alfabetos, posteriormente se reconoció para todos los varones y para las mujeres alfabetas, por último el acceso a derechos electorales fue sin distinción de educación o género. En algunos periodos el voto fue obligatorio para algunas personas y optativo para otras, en otro período se reconoció como un derecho secreto. Hoy en día, es voluntario, universal y secreto. Actualmente todos los guatemaltecos mayores de dieciocho años, pueden ejercer sus derechos electorales, no existe ningún tipo de exclusión por ningún motivo. El ejercicio del sufragio es un derecho para todos los guatemaltecos residentes en el país. Sin embargo, para poder ejercer los derechos electorales, se debe realizar el proceso de inscripción en el Registro de Ciudadano. En cambio, la legislación guatemalteca no reconoce ningún derecho electoral a los extranjeros que residen en el país, ni regula el voto de ciudadanos guatemaltecos que residen en el extranjero.

El único método que se utiliza en las elecciones de Guatemala, aplicable a todos los tipos de elecciones, es el del voto presencial en el centro de votación del municipio en dónde

el votante está registrado, aun cuando las elecciones se realizan a nivel nacional y es el mismo día para elegir en todas las categorías de elecciones.

La evolución de los mecanismos para facilitar el ejercicio de derechos electorales en Guatemala aún tiene un largo camino por recorrer. El sistema electoral guatemalteco además de necesitar la ampliación de los mecanismos para ejercer derechos electorales, debe implementar mecanismos para facilitar la participación de todos los ciudadanos sin perjuicio de su etnia, género o condición socioeconómica. Para ello, se debe dar la aprobación de nueva legislación, la implementación de mecanismos de democracia interna dentro de los partidos políticos y de permitir las candidaturas a cargos públicos de forma independiente.

Si bien el sistema electoral guatemalteco privilegia la representatividad, no logra una inclusión fuerte de ciertos grupos de la población. Se debe considerar una reforma en la cual los partidos políticos sean verdaderas instituciones públicas, fuertes, inclusivas y que logren equilibrar las cuotas de poder político que se les otorga a través de elecciones.

Referencias Bibliográficas

- Batres, Susan y Del Cid, Jeraldine. (2011), *Presencia y participación maya en las estructuras partidarias y candidaturas a diputaciones en el proceso electoral 2011*. Momento. Asociación de Investigación y Estudios Sociales.
- Escutia Orta, José Luis. *Perspectiva comparada del voto en el extranjero en 18 países de América Latina*. Recuperado el 15 de diciembre de 2014 de: <http://www.mundoelectoral.com/html/index.php?id=1007>
- García Laguardia, Jorge Mario. (1999), *Constitución y Partidos Políticos en Guatemala*. Guatemala. Asistencia Técnica de la Organización de Estados Americanos al Tribunal Supremo Electoral.
- Guerra Roldán, Mario Roberto. (1996), *El Sistema Electoral Guatemalteco. Fundamentos Filosóficos, constitucionales y legales*. Rescatado el 12 de diciembre de 2012 de: biblio.juridicas.unam.mx/libros/1/192/3.pdf
- Instituto Nacional de Estadística. (2013), *Caracterización estadística de la República de Guatemala 2012*. Recuperado el 08 de junio de 2015 de: <http://www.ine.gob.gt/sistema/uploads/2014/02/26/5eTCcFIHErnaNVeUmm3iabXHhKgXtw0C.pdf>
- Tribunal Supremo Electoral. (1998), *Aspectos de la Organización Electoral de Guatemala*. Guatemala. Embajada de Suecia-Minugua.
- Sáenz Juárez, Luis Felipe. (2002), *La Justicia Electoral en Guatemala*. Guatemala. Agencia española de Cooperación Internacional.
- Vásquez, Sofía L. Galicia, Patricia. Monzón, Ana Silvia. (2013), *Entre la realidad y el desafío: mujeres y participación política en Guatemala*. Guatemala. Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres)- Instituto Nacional Democrata para Asuntos Internacionales (NDI).

